

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, mayo treinta (30) de dos mil veintitrés (2023)

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001310501120170093901, promovido por el señor **MÍGUEL ÁNGEL CORTÉS RINCÓN**, en contra del señor **NESTOR ÁNGEL BOTERO** y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, con la finalidad de resolver el recurso de apelación presentado por ambas demandadas y el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones frente a la sentencia emitida el 29 de abril de 2019 por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **147**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Pretende el demandante se declare la existencia de un contrato laboral suscrito con el señor Néstor Ángel Botero entre el 23/01/1998 y el 31/07/2007; y consecuentemente se condene a su ex empleador al pago del título pensional por la omisión en su afiliación y el no pago de aportes al SGP, sumas que deberán ser consignadas y recibidas por Colpensiones; la indexación y las costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones expuso que celebró contrato con el señor Néstor Ángel Botero el 23/01/1998 en el cargo de mayordomo en la finca “Lomalinda” del Municipio de Amaga, en un horario superior a 8 horas diarias, devengando un SMLMV y que el mismo fue finalizado el 31/07/2007.

Soslaya que su empleador le canceló anualmente las prestaciones sociales y las vacaciones, pero nunca lo afilió; y, por ende, nunca le realizó cotizaciones al SGP administrado por Colpensiones, presentando tan solo 468,57 semanas cotizadas en toda su vida laboral.

Finalmente informa que realizó solicitud de pago de título pensional tanto a Colpensiones el 02/10/2017 como a su ex empleador el 26/10/2017, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta alguna.

Respecto al libelo genitor, los demandados en su oportunidad procesal expusieron:

NÉSTOR ÁNGEL BOTERO. Afirma que es cierta la existencia del contrato laboral con el demandante, los extremos laborales, el pago anual de las prestaciones sociales y sus vacaciones, y la reclamación suscrita por el actor, pero niega que éste haya laborado jornadas superiores a 8 horas diarias.

Señala que por desconocimiento nunca afilió y pago los aportes al SGP de su ex trabajador, pero que una vez le fue reclamado su pago; esto es, para el año 2017,

solicitó a Colpensiones (noviembre/2017) la liquidación del respectivo título, radicando junto el formulario los documentos relacionados.

COLPENSIONES. Señala que el accionante se encuentra activo cotizante a dicha administradora, presentando en la actualidad un total de 502.86 semanas cotizadas en toda la vida laboral.

Que mediante Res. BZ2017_10679490-2699341 dio respuesta a la solicitud impetrada por el demandante, y le indicó que, para efectuar el cálculo actuarial y la corrección de la historia laboral, debía allegar la documentación necesaria, sin que dicha respuesta implique un actuar omisivo o contrario a derecho.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

DECLARÓ que entre el demandante Señor MIGUEL ÁNGEL CORTÉS RINCÓN y el señor NÉSTOR ÁNGEL BOTERO existió una relación laboral entre el 23/01/1998 y el 31/07/2007. CONDENÓ al señor NÉSTOR ÁNGEL BOTERO a trasladar con destino a COLPENSIONES, con base en el cálculo actuarial elaborado por dicha entidad, la suma correspondiente para cubrir las cotizaciones de los periodos comprendidos entre el 23/01/1998 al 31/07/2007 a favor del señor MIGUEL ÁNGEL CORTÉS RINCÓN. ORDENÓ a COLPENSIONES realizar en un término no superior a 30 días después de la ejecutoria de la presente providencia, la liquidación del cálculo actuarial por las cotizaciones de los periodos comprendidos entre el 23/01/1998 al 31/07/2007 con los salarios establecidos en la parte motiva de la presente providencia. Que una vez Colpensiones reciba el pago del cálculo actuarial, debe validar y cargar las semanas cotizadas en la historia laboral del demandante; Y CONDENÓ en costas a cada una de las demandadas y a favor del demandante.

RECURSO DE APELACIÓN - DEMANDADAS

*** NÉSTOR ÁNGEL BOTERO.** Presenta inconformidad parcial frente a la sentencia, esto es, frente a la condena impuesta por concepto de costas

procesales, al afirmar que nunca se opuso a las pretensiones de la demanda, y que por el contrario siempre se allano a las mismas.

*** COLPENSIONES.** Afirma que no es procedente la condena en costas procesales en su contra, toda vez que dicha administradora es independiente a la Litis, y el no reconocimiento del cálculo actuarial obedeció a que dentro del trámite administrativo no se aportaron los documentos pertinentes y necesarios, aunado a que nunca se opuso a las pretensiones de la demanda.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

COLPENSIONES. Solicita la apoderada se revoque parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto la condena impuesta por concepto de costas procesales, por 3 razones principales: la primera que dicha administradora es un tercero independiente a la litis; segundo, que el no reconocimiento del cálculo actuarial obedeció a que el demandante no aportó los documentos requeridos; y tercero, que dicha administradora no es competente para declarar la existencia del contrato laboral, fuente del derecho para la liquidación del título pensional.

La parte demandante presenta Alegatos de conclusión, los cuales son extemporáneos.

PROBLEMA JURÍDICO

Determinar si entre el señor Miguel Ángel Cortes Rincón y el señor Néstor Ángel Botero existió una verdadera relación laboral, y, en consecuencia, si resulta procedente que este último pague con destino a Colpensiones y en favor del demandante, el cálculo actuarial por el periodo comprendido entre el 23/01/1998 y el 31/07/2007; finalmente y de ser procedente, se estudiara las condenas impuestas por concepto de costas procesales a ambas demandadas.

CONSIDERACIONES

Sea lo primero indicar que la competencia de esta Corporación está dada no solo por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con los Arts. 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente; sino también por el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones de conformidad con lo consagrado en el artículo 69 del C.P.T.

DE LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO

En primer término, se tiene que el contrato de trabajo es un acuerdo celebrado entre dos partes, una de ellas denominada trabajador y otra empleadora, donde el primero presta personalmente sus servicios orientado bajo la subordinación hacia el segundo, y recibiendo una contraprestación denominada salario.

En aras de equilibrar la relación desigual entre las partes consecuente al poder subordinante del empleador, el legislador, consagró un mínimo de derechos y garantías, que propenden por el respeto a la dignidad del trabajador.

Para ello, el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, delimitó tres elementos para diferenciar el contrato de trabajo de otros que pudiera darse en el desarrollo de las relaciones humanas, así:

“...ARTICULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES.

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurren estos tres elementos esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen...”.

Por su parte, en el artículo 24 ibídem se precisa:

“...Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo...”.

Presunción que es de carácter legal, o sea que admite prueba en contrario, lo cual faculta al supuesto empleador para contraprobarla y de tal manera entrar a desvirtuarla.

Sobre lo anterior, la Sala de Casación Laboral de la C. S. de J., en Sentencia del 8 de junio de 2016, Radicado 47.385, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, reiterando el criterio que de antaño ha adocinado la Corporación, señaló:

“... para la configuración del contrato de trabajo se requiere que esté demostrada la actividad personal del trabajador a favor del demandado, y en lo que respecta a la continuada subordinación jurídica -que es el elemento característico y diferenciador de toda relación de carácter laboral-, no es menester su acreditación cuando se encuentra evidenciada esa prestación del servicio, dado que en tal evento, lo pertinente es hacer uso de la presunción legal prevista en el artículo 24 del CST, modificado por el art. 2° de la L. 50/1990, según el cual «se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo»

De acuerdo con lo anterior, al actor le basta con probar en el curso de la Litis, su actividad personal, para que se presuma en su favor el contrato de trabajo, y es al empleador a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción, demostrando que la relación fue independiente y no subordinada.”

Criterio reiterado en sentencias CSJ SL, 13 abr. 2010, rad. 34223; SL4027-2017, SL 365 de 2019 y SL2976-2020, Radicación n.º 68876 del 11 de agosto de dos 2020, entre otras.

Ahora, es de advertir, que la presunción en comento, además de ser susceptible de ser desvirtuada, no releva a la parte actora de otras cargas probatorias, tales como acreditar los extremos temporales de la relación, el monto del salario, su jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario si lo alega, el hecho del despido cuando se demanda la indemnización por terminación del vínculo sin justa causa, entre otros. Al respecto indicó la Honorable Corte Suprema de justicia Sala de Casación Laboral, en sentencia del 6 de marzo de 2012:

“...recuerda la Corte que la circunstancia de quedar demostrada la prestación personal del servicio, debiéndose presumir la existencia del contrato de trabajo en los términos del artículo 24

del Código Sustantivo del Trabajo, no releva al demandante de otras cargas probatorias, pues además le atañe acreditar ciertos supuestos transcendentales dentro de esta clase de reclamación de derechos, como por ejemplo los extremos temporales de la relación, el monto del salario, su jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario si lo alega, el hecho del despido cuando se demanda la indemnización por terminación del vínculo sin justa causa, entre otros.

De antaño se ha considerado como principio universal en cuestión de la carga probatoria, que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a su vez a quien pretende o demanda un derecho, que alegue y demuestre los hechos que lo gestan, o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba a la parte contraria, cuando se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado...”

Así lo ha reiterado dicha corporación en sentencias 36748 de 2009, SL 9156 de 2015, SL 11156 de 2017, SL 4912 de 2020 y SL 1430 de 2021 entre otras.

MATERIAL PROBATORIO.

Examinada en conjunto la prueba documental que reposa al interior del expediente digital, la Sala encuentra:

- Copia de la liquidación de prestaciones sociales del demandante (folios 16 a 25 del anexo 02).
- Historia laboral con fecha de actualización del 24/08/2017 emitida por Colpensiones (folios 27 a 30 anexo 02)
- Solicitud de liquidación de cálculo actuarial suscrito por el demandante y dirigida a Colpensiones con fecha del 02/10/2017 (folios 31 a 34 anexo 02).
- Derecho de petición suscrito por el demandante y dirigido al señor Néstor Ángel Botero del 26/10/2017 pretendiendo el pago de los aportes al SGP (folios 36 a 48 anexo 02).
- Colilla de radicación de solicitud de cálculo actuarial realizada a Colpensiones y aportada por el demandado Señor Néstor Ángel Botero con fecha del 11/12/2017 (folio 09 anexo 08).

Vislumbra la Sala que las partes en la etapa de practica de las pruebas, desistieron tanto del interrogatorio de parte como de la prueba testimonial solicitada, no obstante, esta Sala en aras de auscultar la verdad real y material, frente a la

verdadera existencia del contrato laboral pretendido y de conformidad con las facultades consagradas por el Art. 54 del CPTSS, en concordancia con el Art. 41 de la Ley 712 de 2001, que modificó al Art. 83 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social reabrió el debate probatorio. Por lo cual, mediante Auto del 27/04/2023 modificado por Auto del 05/05/2023 decreta la recepción de los testigos de la parte demandante: señores (as) Oscar William Marín Palacio, María Marleny Castañeda Muñoz y José Flavio Cortes Rincón quienes manifestaron:

- José Flavio Cortes Rincón (hermano del demandante): Que conoció al demandado porque lo vio 1 o 2 veces cuando iba a visitar a su hermano a la finca donde vivía y trabajaba. Que entre el demandante y demandado existió una relación laboral entre los años 2017 y 2006, que el actor laboró como mayordomo de la finca, realizando las funciones propias de la finca, aclara que la relación lo fue del año 2006 al 2017. Que el actor tenía como funciones la adecuación de jardines, administración de animales, todas las labores que conllevaba la finca, guadañar, organización de la cancha, de la piscina y todas las labores de la casa. Que el actor no tenía horario, porque debía estar todo el tiempo allá. Que al actor le pagaban cesantías, pero no aportes a pensión. Que toda la información que conoce del caso fue porque el propio demandante le contó, que supone que el demandado le daba órdenes al demandante, porque así son las relaciones de patrono y trabajador, pero que nunca lo presencié.
- María Marleny Castañeda Muñoz: Que conoce al demandante porque son cuñados y al demandado desde hace 27 años porque es el dueño de la finca donde trabajo el demandante, finca vecina o colindante donde vive la declarante desde hace 27 años. Que el actor era quien administraba la finca del demandado. Que tenía como funciones guadañar, las de jardinería y todo lo que se hace en una casa finca. Que la relación lo fue del año 1997 a mitad del año 2006, lo sabe porque fue ella y su esposo quienes recomendaron al actor para laborar en dicha finca. Que el demandante vivía en la misma finca donde trabajaba. Que el demandante vivía en la finca con su esposa y un hijo. Que desconoce si la contratación fue escrita o verbal. El horario era impuesto por

el demandado, porque eso lo imponen en toda finca. Que ella lo visitaba todos los días, porque las fincas eran colindantes.

- Oscar William Marín Palacio: Que conoce al demandante hace más de 30 años porque son “concuñados” y al demandado alrededor de 27 años porque es propietario de la finca contigua a la cual el labora. Que el demandante fue el mayordomo de la finca del demandado desde el año 1997 hasta el año 2006, que recuerda esas fechas porque fue él quien lo recomendó. Que desconoce que contrato firmaron, que sabe que cuando el demandante se retiró le quedaron debiendo las prestaciones sociales.

Descendiendo al caso, considera la Sala que le correspondía al demandante probar la prestación personal del servicio, como ya se indicó, para que entrara a operar en su favor, la presunción del contrato de trabajo, esto es, que la relación estuvo regida por un único contrato de tal índole; carga de la prueba que en el presente caso cumplió, por las siguientes razones:

Sea lo primero indicar que la parte demandada aceptó desde la contestación a la demanda, la existencia del contrato laboral suscrito entre las partes y los extremos de la misma; y en segundo lugar, la prueba testimonial, específicamente las declaraciones del señor Oscar William Marín Palacio y la señora María Marleny Castañeda Muñoz fueron claros y coherentes en afirmar que el demandante laboró para el señor Néstor Ángel Cortés Rincón desde el año 1997 a 2006, siempre bajo las órdenes y directrices del empleador.

Así las cosas, y en aplicación del principio de libre apreciación de las pruebas consagrado en el artículo 61 del CPT y de la SS, considera esta Sala que se encuentra demostrado de forma fehaciente y suficiente cada uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo, es decir, las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de su vinculación y la continuada prestación del servicio entre el 23/01/1998 al 31/07/2007, estando a sí demostrado que la relación laboral alegada por el demandante y reconocida por el accionado fue real, razón suficiente para **CONFIRMAR** la decisión de primera instancia.

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL POR TODO EL TIEMPO LABORADO.

Según el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un servicio público que se debe garantizar a todos los habitantes del territorio nacional, tiene carácter obligatorio y es irrenunciable. Con el fin de reglamentar el ejercicio de este derecho constitucional, se promulgó la Ley 100 de 1993 o Sistema de Seguridad Social Integral, el cual incluyó el sistema general de pensiones, de salud y de riesgos profesionales, cuyos objetivos fueron dispuestos en el artículo 6° de la referida norma.

Conforme al artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 797 de 2003, que trata sobre los afiliados al Sistema General de Pensiones, y al artículo 157 ibídem, que tiene que ver con los tipos de Participantes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, es de advertir que en el caso de las personas vinculadas mediante contrato de trabajo, corresponde al empleador, no sólo efectuar la afiliación al sistema general de seguridad social, sino pagar los respectivos aportes a cada subsistema, en los porcentajes que indica la norma. Al respecto, el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, establece que dentro de las obligaciones en cabeza del empleador radica la de descontar del salario del trabajador el valor correspondiente a los aportes obligatorios y trasladar dichas sumas a la entidad respectiva.

Del análisis de la prueba obrante en el proceso, se desprende que en favor del señor Miguel Ángel Cortés Rincón, existen unos periodos laborados y no cotizados del 23/01/1998 al 31/07/2007, los cuales, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, generan un cálculo actuarial que da la posibilidad de trasladar al Sistema General de Pensiones una reserva actuarial, en tanto el empleador omitió el deber de afiliarlo, con ello pretende el legislador que esas semanas se contabilicen para todos los efectos prestacionales. No obstante dicha contabilización, de conformidad con el Parágrafo del artículo 33 ibídem¹ y el inciso 6 del artículo 17

¹ “.....Para efectos del cómputo de las semanas, se tendrá en cuenta:

del Decreto 3798 de 2003, sólo se materializa si se traslada el valor de la reserva actuarial o el título pensional respectivo, según proceda, a satisfacción de la entidad administradora seleccionada por el trabajador.

Así las cosas, es procedente ordenar, como bien lo dedujo el *a quo*, al empleador demandado señor Néstor Ángel Cortés Rincón a pagar el cálculo actuarial por los periodos laborados por el señor Miguel Ángel Cortés Rincón, y no cotizados del existen unos periodos laborados y no cotizados del 23/01/1998 al 31/07/2007, extremos estos aceptados en la respuesta a la demanda, con base en el salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad, conforme a la normatividad citada.

El cálculo actuarial deberá ser cancelado a Colpensiones previa liquidación que realice ésta, pues fue la última administradora de pensiones donde estuvo afiliado, según se advierte de las historias laborales. Dicha entidad deberá realizar la liquidación del referido calculo, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, razón suficiente para **CONFIRMAR** en este punto.

COSTAS PROCESALES

Conforme al artículo 365 del CGP, las costas constituyen la condena accesorio que impone el juez a la parte vencida en un proceso, así:

En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condena en costas se sujetara a las siguientes reglas:

-
- a) El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones;
 - b) El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, incluyendo los tiempos servidos en regímenes exceptuados;
 - c) El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.
 - d) El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador
 - e) El número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado que antes de la Ley 100 de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión.

En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional.....”

Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso... ”.

Es de resaltar que el objeto del proceso es la pretensión que se hace valer en la demanda, por tanto lo dispuesto en la sentencia ha de corresponderse con aquella, cualquiera fuere su naturaleza, y acogerla o rechazarla, según resulte fundada o infundada la pretensión, la ley procesal ordena al Juez condenar al pago de las costas a la parte vencida, creando así la naturaleza accesoria de la condena en costas, por la relación de medio a fin en que las costas se encuentran con la pretensión reconocida o negada en la sentencia.

No obstante lo anterior, observa la sala que tal como lo asegura el representante judicial de COLPENSIONES en su recurso de alzada, la comparecencia de dicha entidad pública de pensiones al proceso, obedece a la necesidad de recibir los dineros resultantes de la liquidación del cálculo actuarial correspondiente, y si bien le había sido solicitado vía administrativa, no se acreditó que la parte actora haya cumplido su carga de allegar la documentación requerida por dicha entidad, por tanto los mismos serán REVOCADOS frente a dicha parte.

Por otra parte, frente a las costas impuestas al señor NESTOR ÁNGEL BOTERO, nos e puede predicar la misma situación de COLPENSIONES, toda vez que tuvo un actuar omisivo en cuanto se refiere a la afiliación al sistema de seguridad social de su trabajador ahora demandante, siendo esta conducta la que generó el presente litigio, debiéndose CONFIRMAR la sentencia de instancia también en este punto.

Costas Procesales en esta instancia a cargo del codemandado NESTOR ANGEL BOTERO, y en favor del señor MIGUEL ANGEL CORTES RINCÓN, al no prosperar el recurso interpuesto. Fijase como agencias en derecho en esta Sede la suma total de UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$1'160.000=).

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la condena en costas impuestas en primera instancia en contra de la ADMINSTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín el 29 de abril de 2019, dentro del Proceso Ordinario Laboral promovido por el señor **MIGUEL ÁNGEL CORTES RINCÓN** en contra del señor **NESTOR ÁNGEL BOTERO** y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, en todo lo demás, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: Costas Procesales en esta instancia a cargo del codemandado NESTOR ÁNGEL BOTERO, y en favor del demandante MIGUEL ANGEL CORTÉS. Fijase como agencias en derecho en esta Sede la suma de UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$1.160.000=).

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Se ordena regresar el expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **40b10cf6babbd50437793ed47593e075a844ccff9e8446ccf670d8eb88abf4e3**

Documento generado en 30/05/2023 11:41:52 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>